



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021-2024

OCEGN36-US-D83/2021.

ASUNTO. - Se emite Resolución Administrativa.

Nogales, Sonora a cuatro de mayo del año dos mil veintidós.

C.

Vistos, para resolver, en definitiva, los autos originales de la carpeta administrativa **OCEGN36-US-D83/2021**, relativo al proceso administrativo instruido en contra de **por el INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PREVISTA EN EL ARTICULO 88 FRACCIÓN I, DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DEL ESTADO DE SONORA**, cometido en agravio del **AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**; y

RESULTANDO

Primero. Con fecha quince de junio de dos mil veinte, se recibió oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR ISAF/DGI/5333/2020 de fecha treinta de marzo de dos mil veintè, signado por el Lic. Saúl Ballesteros Leyva, en su carácter de Titular de la Unidad de Investigación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, por medio del cual remitió al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, expediente de Investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa ISAF/DGI/574/2020, correspondiente a la Cuenta Pública 2018 practicada al ente IMIP del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, de la cual se desprendió la observación número 1, la cual no fue solventada, y siendo que quien se encontraba como enlace responsable de atender y entregar los requerimientos para dar solventación a tal observación era la C. **motivo** por el cual el Titular de la Unidad de Investigación inició en base a sus facultades el procedimiento de investigación correspondiente, por el **INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 88 FRACCIÓN I DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DEL ESTADO DE SONORA**, cometido en agravio del **AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**, ordenándose solicitar los informes correspondientes aunado a que se realizaron las notificaciones requeridas respetando el debido proceso, garantías individuales, así como la presunción de inocencia derivado de la responsabilidad imputada en contra de la servidor público.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. FACULTADES Y COMPETENCIA.

Este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora **es competente** para resolver sobre la comisión de irregularidades de carácter administrativo cometidas por los servidores públicos, de las dependencias de la administración pública municipal, así como sus paramunicipales, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del **Artículo 135** de la **Constitución Política del Estado de Sonora**, que a la letra establece: "...Los Ayuntamientos deberán tener un sistema administrativo interno de control y evaluación gubernamental, el cual deberá ser regulado por la Legislación correspondiente". Así mismo los numerales 94, 95 y 96 fracciones XI, XIV y XIX de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora que a su vez disponen: **Artículo 94.-** El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público; **Artículo 95.-** El Sistema estará a cargo de un Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, cuyo titular será propuesto por el Presidente Municipal, debiendo reunir los requisitos establecidos para ser Tesorero Municipal; **Artículo 96.-** el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 94 de la presente ley, ejercerá las siguientes facultades: Fracciones **XI.-** conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el ministerio público, prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria, **XIV.-** establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias y **XIX.-** las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. Así mismo, este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental es competente para aplicar la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, según lo establece los artículos 1, 2 fracción V, 3 fracciones II, III y IV, 4 fracciones I, II y III, 9 fracción II, 10 de **Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora**, que señalan textualmente: **Artículo 1.-** La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora, y tiene por objeto establecer los lineamientos de aplicación en concurrencia con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como regular lo no previsto en dicha ley. Establecerá las bases para la implementación del Servicio Profesional de Carrera, para aquellos servidores públicos vinculados a la investigación y sustanciación de las faltas administrativas, en los términos que esta ley dispone; **Artículo 2.-** Son objeto de la presente Ley: **V.-** Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; **Artículo 3.-** Para efectos de esta Ley se entenderá por: **II.-** Autoridad investigadora: La Coordinación de Investigación de la Secretaría, el ISAF y los Órganos internos de control que se definen en esta Ley, encargados de la investigación de faltas administrativas; **III.-** Autoridad sustanciadora: La Coordinación Sustanciadora de la Secretaría, el ISAF y los Órganos internos de control, entre los que se incluyen a los órganos de control y evaluación gubernamental de los ayuntamientos, en su caso, que se definen en esta

Ley, que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, tratándose de faltas administrativas graves y cometidas por particulares; y hasta el periodo de alegatos tratándose de faltas administrativas no graves. La función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora;

IV.- Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado, tanto en la Secretaría como en los Órganos internos de control que se definen en esta ley. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal;

Artículo 4.- Son sujetos de esta Ley: **I.-** Los Servidores Públicos; **II.-** Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley; y **III.-** Los particulares vinculados con faltas administrativas graves;

Artículo 9.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en materia de responsabilidades administrativas: **II.-** Los Órganos internos de control, entre los que se incluyen a los órganos de control y evaluación gubernamental de los ayuntamientos;

Artículo 10.- La Secretaría y los Órganos internos de control, tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas; por otra parte, y atendiendo a lo establecido en el artículo 152 fracción IX del **Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora**, normatividad que establece lo siguiente: **Artículo 152.-** Al Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental corresponde ejercer además de las facultades, atribuciones, deberes y obligaciones que le señalan los artículos 94, 95 y 96 fracciones de la I a la XIX, 97 y del 246 al 257 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y para estos efectos, contara con las áreas y personal que el Ayuntamiento le aprueba, cumpliendo con lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades, además de las siguientes: ... **IX** Aplicar la Ley Estatal de Responsabilidades con todas las facultades y obligaciones que le otorga la misma. Bajo ese tenor, **esta Coordinación de Sustanciación y Resolución es competente para sustanciar, resolver y sancionar todos aquellos actos y omisiones cometidos por los servidores públicos que pudieran generar responsabilidad administrativa respecto a faltas no graves**, en la circunscripción territorial del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, tal y como lo establece el artículo 152 fracción XIX del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, que establece: **XIX.-** Sustanciar, por conducto de la Coordinación Sustanciadora y Resolutora, los procedimientos de responsabilidad administrativa que establece la Ley Estatal de Responsabilidades; en concordancia con los artículos 88, 242 fracción V, 243, 244, 245 y 248 fracciones X y XI, Ley Estatal de Responsabilidades, mismos que señalan: **Artículo 88.-** Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: **I.-** Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; **II.-** Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 133 de la presente Ley; **III.-** Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las

Handwritten signature: *[Signature]*

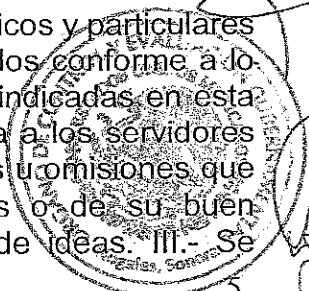
Official stamp: **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**

Handwritten signature: *[Signature]*

disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 133 de la presente Ley; IV.- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, en los términos establecidos por esta Ley y observando la normatividad correspondiente a la reserva o confidencialidad de datos personales; V.- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; VI.- Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo; VII.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables; VIII.- Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte; IX.- Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento; X.- Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano Interno de Control, o en su caso de la Secretaría, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad; y XI.- Omitir el impulso procesal que oficiosamente corresponda, tratándose de juicios o procedimientos de carácter administrativo, cuyo incumplimiento derive en la caducidad de los mismos. Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales; **Artículo 242.-** Las Resoluciones serán: V.- Sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa; **Artículo 243.-** Las resoluciones deben ser firmadas de forma autógrafa por la autoridad que la emita, y, de ser el caso, por el secretario correspondiente en los términos que se dispongan en las leyes; **Artículo 244.-** Los acuerdos, autos y sentencias no podrán modificarse después de haberse firmado, pero las autoridades que los emitan sí podrán aclarar algún concepto cuando éstos sean oscuros o imprecisos, sin alterar su esencia. Las aclaraciones podrán realizarse de oficio, o a petición de alguna de las partes las que deberán promoverse dentro de los tres días hábiles siguientes a que se tenga por hecha la notificación de la resolución, en cuyo caso la resolución que corresponda se dictará dentro de los tres días hábiles siguientes; **Artículo 245.-** Toda resolución deberá ser clara, precisa y congruente con las promociones de las partes, resolviendo sobre lo que en ellas hubieren pedido. Se deberá utilizar un lenguaje sencillo y claro, debiendo evitar las transcripciones innecesarias. **Artículo 248.-** En los asuntos relacionados con

faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes: X.- Una vez transcurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; y XI.- La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

En conclusión, este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a través de la Coordinación Sustanciadora y Resolutora es competente para resolver la presente **resolución** la cual se deriva de la naturaleza específica del caso que versa sobre responsabilidad administrativa de un ciudadano que desempeño un cargo o comisión, de esta manera todas aquellas personas que desempeñen un cargo, forman parte de la Administración Pública Municipal; toda vez que la propia Ley de Gobierno y Administración Municipal en su **Artículo 81**, señala que: el Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración Pública Municipal Directa y Paramunicipal; siendo evidente que ambas formas de la Administración Municipal, conforman parte de lo que se conoce como administración pública municipal, sujetando tanto a las personas que desempeñan un cargo en la administración pública municipal directa, como en la administración paramunicipal al régimen de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, previstas tanto en la constitución política del estado de Sonora, como en la propia Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora; según se señala en el Artículo 143, 143 A, 143 B fracciones I, III y IV, 144 fracción III, 147, 148 de la Ley Suprema de Nuestro Estado que a la letra establecen: Artículo 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, **toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como municipal**, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales; Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia Administrativa y quienes laboren en los organismos públicos con autonomía legal; **Artículo 143 A.-** El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; **Artículo 143 B.-** Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I.- Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en esta Constitución y en las que determine la Ley que al efecto se emita a los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. III.- Se




aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, conocerá de los mismos las autoridades que determine su propia ley orgánica, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

IV.- La Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos, la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. La ley establecerá los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. **Artículo 144.-** El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos mencionados en el presente Título así como las leyes en

materia de auditoría, fiscalización y combate a la corrupción que establezcan las normas precisas para determinar y sancionar sus actos u omisiones que generen alguno de los siguientes tipos de responsabilidad: III.- Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, incluyendo sin limitar, el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública. Las sanciones aplicables a esta forma de responsabilidad, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como en sanciones económicas, que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados; **Artículo 147.**- Las normas sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado y de los Municipios, determinarán con claridad las conductas que lesionen la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio, así como los procedimientos, las sanciones y las autoridades que deban aplicarlas. También señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones de que se trate. Cuando el hecho fuese grave, la prescripción no será inferior a tres años; **Artículo 148.**- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en el presente Título, se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.

SEGUNDO. ACUSACIÓN Y DEFENSA.

El Titular de la Autoridad Investigadora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, por motivos de la falta de cumplimiento derivado de la omisión de cumplir con sus funciones, atribuciones y comisión encomendada mediante oficio 150/2018 de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, signado por la C. Arq.  en su momento Directora General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora, quien se designó personalmente para atender, entregar los requerimientos, así como de comentar y aclarar en su caso, los resultados de la revisión que realizaran los auditores, para atender la Auditoría No. 2018AM0102010170, misma que fue omisa en observar el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, **INCUMPLIENDO LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 88 FRACCIÓN I DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DEL ESTADO DE SONORA**, cometido en agravio del **AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**, quien aportó los medios de convicción necesarios y suficientes para acreditar fehacientemente la existencia de la falta administrativa consistente en omisión de obligaciones.

Por su parte, la encausada manifestó en la audiencia de ley, que en ningún momento se pretendió incumplir con

la solventó dentro del término descrito por el ISAF, sin embargo, la carga laboral la sobrepaso en sus capacidades, toda vez que la dependencia que en su momento tuvo a cargo, no contaba con el personal que les permitiera cumplir con sus obligaciones, por lo que era imposible cumplir con toda la carga laboral, ya que únicamente laboraban seis personas, en una dependencia que debería haber treinta y dos, también manifestó que no se cumplió con el acuerdo de creación del IMIP, en cuanto a presupuesto, así pues, una vez que se pudo completar la información, se solventó y quedó totalmente solventada.

TERCERO. MÉTODO.

En principio, este órgano Administrativo estima importante declarar que el presente fallo se resolverá no sólo a la luz de los ordenamientos jurídicos internos a partir de los cuales tradicionalmente se han resuelto estas causas sino, también, considerando los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que aluden tanto a los derechos del procesado como a los de la víctima, y que son particularmente vinculantes en el contexto que a continuación se expondrá.

En los últimos años, el Estado mexicano ha suscrito una importante cantidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los cuales son especialmente vinculantes a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once que reconoce a todas las personas como titulares de los derechos establecidos, no sólo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y vincula a todas las autoridades del país a garantizar, en todas sus decisiones, la protección más amplia de estos derechos (*principio pro homine o pro personae*). De esta manera, a partir de esta reforma, los tratados internacionales constituyen un marco de referencia ineludible para la actuación de la judicatura, tal como se establece en las tesis P. LXVII/2011(9a.), P. LXVIII/2011 (9a.), P. LXIX/2011(9a.) y P. LXX/2011 (9a.), todas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en diciembre de dos mil doce. ¹

¹ "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex-officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos

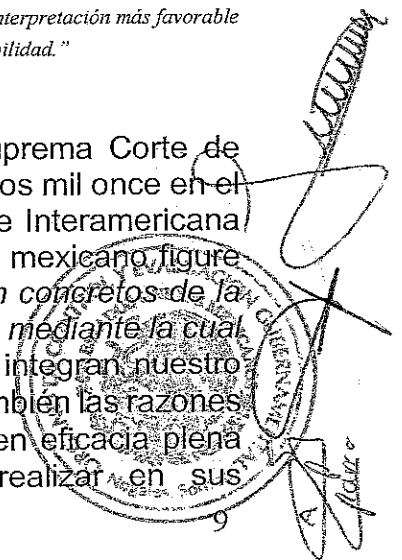
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como si sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), si están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.”

“**PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.** El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.”

“**PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.** La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.”

“**SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.** Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad.”

Asimismo, en el contexto de esta relevante reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución dictada el catorce de julio de dos mil once en el expediente Varios 912/2010, estableció que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitidos en los casos en los que el Estado mexicano figure como parte, “son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio”, con lo cual, además de los derechos que integran nuestro sistema jurídico gracias a la Reforma Constitucional recién citada, también las razones del tribunal interamericano que constan en los fallos aludidos tienen eficacia plena para la fundamentación que todo juzgador mexicano debe realizar en sus



resoluciones. Este criterio se estableció en la tesis P. LXV/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en diciembre de dos mil once.²

2 "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella."

En este nuevo catálogo de derechos subjetivos públicos que fueron introducidos en nuestro sistema jurídico con motivo de la creciente preocupación de la comunidad internacional en general por el respeto a los derechos humanos, destaca con especial énfasis el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellos derechos que conforman las garantías del debido proceso.

En México, en palabras de don Héctor Fix-Zamudio, el debido proceso se ha entendido como *"el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados"* (Diccionario jurídico mexicano, Porrúa, 1987), condiciones que, de acuerdo a nuestro orden Constitucional tradicional se extienden a la existencia de un proceso previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, la prohibición de tribunales especiales y leyes privativas, la restricción de la jurisdicción militar, el derecho o garantía de audiencia, la fundamentación y motivación dictadas por autoridad competente, y otros aspectos substanciales que aluden a la evaluación de lo decidido por los tribunales y su compatibilidad con los principios lógicos y jurídicos del sistema.

Por otro lado, si bien no existe de manera expresa referencia al debido proceso en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el conjunto de derechos establecidos en este ordenamiento y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana, ha creado, en su conjunto, lo que podría denominarse el *"debido proceso convencional"*. Al respecto, el Juez Sergio García Ramírez, en el voto razonado que emitió con motivo del caso Claude Reyes y otros contra Chile, advirtió que, en efecto, es la Jurisprudencia interamericana la que *"organiza el sistema de audiencia, defensa y decisión entrañado en [... el] concepto del debido proceso [...]* con diversas expresiones *[... con los cuales asegura] al individuo que los órganos del Estado llamados a determinar sus derechos y deberes [...]* lo harán a través de un procedimiento que provea a la persona con los medios necesarios para defender sus intereses legítimos y obtener pronunciamientos debidamente motivados y fundados, de manera que se halle bajo el amparo de la ley y al abrigo del arbitrio".

Por otro lado, y en cuanto al estudio del material probatorio se refiere, cabe destacar que esta Coordinación Sustanciadora y Resolutora del Órgano Administrativo primeramente se concretará a hacer una reseña enunciativa y meramente informativa del mismo, omitiendo hacer transcripciones ociosas e innecesarias de su contenido, en respeto al principio de la no redundancia, además de estar fundada y motivada y debe ser redactada en forma clara y precisa.

CUARTO. ELEMENTOS DE PRUEBA.

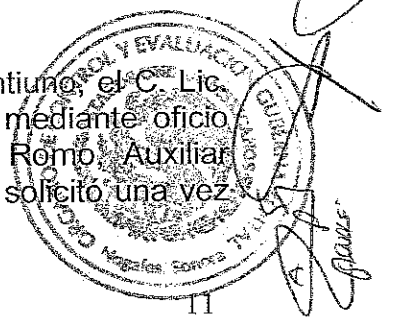
Las pruebas que informan el caso en estudio son las siguientes:

PRIMERO.- Con fecha quince de junio de dos mil veinte, se recibió oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR ISAF/DGI/5333/2020 de fecha treinta de marzo de dos mil veinte, signado por el Lic. Saúl Ballesteros Leyva, en su carácter de Titular de la Unidad de Investigación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, por medio del cual remitió al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, expediente de Investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa ISAF/DGI/574/2020, correspondiente a la Cuenta Pública 2018 practicada al ente IMIP del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, de la cual se desprendió la observación número 1, dando contestación el Titular de la Investigación, mediante oficio número OCEGN31-G1240/2020, de fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, informando al Auditor Mayor del ISAF, del inicio de la investigación.

SEGUNDO. - En fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, visto el oficio ISAF/DGI/5333/2020 de fecha treinta de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Investigación, en análisis del pliego de responsabilidades y anexos, mismos que hicieron las veces de denuncia, acordó formar el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa y registrarlo bajo el expediente E. I. 43/2020 y con ello se iniciara la investigación prevista en el artículo 131 y demás relativos y aplicables de la Ley Estatal de Responsabilidades, al igual ordenar realizar las diligencias correspondientes y necesarias y una vez concluidas formular el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa según corresponda.

TERCERO. - En fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, el C. Lic. Isaac Madrigal Godínez, Titular de la Coordinación Investigadora, mediante oficio OCEGN31-G2741/2021 dirigido a la Titular del Instituto Municipal de Investigación y Planeación del H. Ayuntamiento.

CUARTO. - En fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el C. Lic. Isaac Madrigal Godínez, Titular de la Coordinación Investigadora, mediante oficio OCEGN31-G3139/2021 dirigido a la C. Zuarli Patricia Bojórquez Romo, Auxiliar Contable del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, se le solicitó una vez más remitiera la información solicitada.



QUINTO. – En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se recibe oficio 208/2021, signado por la C. Zuarli Patricia Bojórquez Romo, Auxiliar Contable, mediante el cual proporciona información solicitada en el oficio OCEGN31-G3139/2021, remitiendo diversas copias de oficios, entre ellas el oficio 150/2018 de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se comisionó para atender la auditoria en comento la propia C.

SEXTO. – En fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, el C. Lic. Saul Enrique Torres Cano, Auxiliar de la Coordinación Investigadora, mediante oficio OCEGN31-G3278/2021 dirigido a la C. Zuarli Patricia Bojórquez Romo, Auxiliar Contable del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, mediante el cual le solicitó que informara el servidor público que fungió como responsable de dar cumplimiento al oficio número ISAF/AAM/4584/2019 y remitiera el nombramiento de dicho servidor.

SEPTIMO. – En fecha ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, se recibió oficio número 229/2021 de fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, remitiendo la información solicitada en el oficio OCEGN31-G3278/2021, consistente en señalar a la C. _____ como la responsable de atender la auditoria en comento, así como su nombramiento, y el ultimo domicilio proporcionado.

OCTAVO. – En fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió oficio número OCEGN31-G3696/2020, signado por la C. Lic. Martha Angélica Cervantes Guzmán, en su carácter de Titular de la Coordinación Investigadora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mediante el cual pone a disposición de esta Coordinación Sustanciadora y Resolutora expediente de investigación número E.I. 43/2020, para que se continúe con el procedimiento administrativo correspondiente.

NOVENO. – En fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Autoridad Sustanciadora adscrita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se declara competente para conocer del asunto y acuerda la recepción del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se registra la carpeta de investigación bajo el número de expediente OCEGN36-US-D83/2021, se ordena emplazar a la encausada y se fijan día y hora para el desahogo de la audiencia de Ley.

DECIMO. – En fecha quince de febrero del dos mil veintidós, se llevó a cabo Audiencia de ley de la C. _____, en la cual, si se presentó y manifestó: que en ningún momento se pretendió incumplir con la solvento dentro del término descrito por el ISAF, sin embargo, la carga laboral la sobrepasó en sus capacidades, toda vez que la dependencia que en su momento

tuvo a cargo, no contaba con el personal que les permitiera cumplir con sus obligaciones, por lo que era imposible cumplir con toda la carga laboral, ya que únicamente laboraban seis personas, en una dependencia que debería haber treinta y dos, también manifestó que no se cumplió con el acuerdo de creación del IMIP, en cuanto a presupuesto, así pues, una vez que se pudo completar la información, se solvento y quedo totalmente solventada.

DECIMO PRIMERO. – Se emitió Auto de fecha siete de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se acuerda la admisión de las documentales presentadas por el Titular de la Coordinación Investigadora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, y asimismo se le otorgó termino para presentar alegatos.

QUINTO. EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

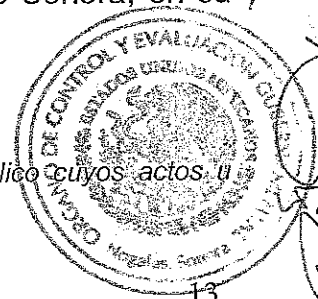
Previamente a realizar el examen de la acreditación de los elementos de la falta administrativa **INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 88 FRACCION I DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DEL ESTADO DE SONORA**, materia de la acusación, cabe decir que tratándose de resoluciones definitivas, lo conducente es analizar las pruebas allegadas al proceso, para resolver si se demuestra la falta administrativa que es materia de la acusación y ello implica precisamente la necesidad de determinar si conforme a las pruebas se acreditan todos los elementos del injusto y no sólo el cuerpo del mismo.

Bajo ese contexto y de acuerdo al análisis de las constancias que integran el presente expediente administrativo, específicamente por el oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR ISAF/DGI/5333/2020, signado por el Lic. Saúl Ballesteros Leyva en su carácter de Titular de la Unidad de Investigación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a través del cual remite el expediente de investigación de presunta responsabilidad administrativa ISAF/DGI/574/2020, para efecto de que continúe con la investigación respectiva y promueva las acciones que procedan por posible falta administrativa no grave.

Es por ello que este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mediante la Coordinación Investigadora del referido Órgano, determinó a través del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno que **SI EXISTEN ELEMENTOS** probatorios suficientes para poder acreditar la existencia de una conducta que se encuentra considerada como **NO GRAVE** por la Ley Estatal de Responsabilidades para el Estado de Sonora, en su numeral 88 fracción I, que para mayor entendimiento se transcribe:

Ley Estatal de Responsabilidades para el Estado de Sonora:

Artículo 88.- Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos, u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:



I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;

Así pues, de las diversas constancias que integran el expediente en tratamiento, se desprende que quedan satisfechos los requisitos para considerar la actuación administrativa irregular por parte de la C.

debido a que del oficio número OFICINA DEL AUDITOR MAYOR ISAF/DGI/5333/2020, de fecha treinta de marzo de dos mil veinte, signados por el Lic. Saúl Ballesteros Leyva en su carácter de Titular de la Unidad de Investigación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, por medio del cual remitió copia certificada del expediente de Investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa ISAF/DGI/574/2020 de la auditoría 2018AM0102010170, al ejercicio fiscal 2018. encontrándose omisiones por parte de la C.

derivadas del incumplimiento del servidor público del desempeño de su empleo, cargo o comisión, una vez analizado el expediente en tratamiento, se demuestra como el servidor público se encontraba obligado en presentar la documentación e información que diera solventación de manera total a las observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, correspondientes a la mencionada auditoría 2018AM0102010170, al ejercicio fiscal 2018, en ese sentido, el servidor encausado en el presente procedimiento, se encontraba fungiendo como enlace de dichas auditorías, como se demuestra a través del oficio 150/2018 de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, oficio signado por la propia

en su carácter de Directora General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora, informando que personalmente ella sería el funcionario responsable de atender dicha auditoría, por ello su obligación era solventar de manera total, y no solo parcial, las observaciones derivadas de la auditoría descrita, esto, en un plazo de treinta días hábiles, como se demuestra con los oficios MEMORANDUM/AAM-0135-2019, y en el Acta Administrativa del Cierre de la Auditoría número 2018AM0102010170, respectivamente, situación que en especie no aconteció, encontrándose en los informes individuales a la auditoría financiera por medio de los cuales se manifiesta que la observación 1, derivada de la auditoría 2018AM0102010170 se encontraba no solventada, así pues derivado del análisis del expediente en tratamiento se concluye que la observación no fue solventada dentro de los plazos establecidos para tales efectos, asimismo, es de tomarse en cuenta que la encausada durante la correspondiente **Audiencias de Ley**, de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, en las cuales manifestó que en ningún momento se pretendió incumplir con la solventó dentro del término descrito por el ISAF, sin embargo, la carga laboral la sobrepaso en sus capacidades, toda vez que la dependencia que en su momento tuvo a cargo, no contaba con el personal que les permitiera cumplir con sus obligaciones, por lo que era imposible cumplir con toda la carga laboral, ya que únicamente laboraban seis personas en una dependencia que debería haber treinta y dos, también manifestó que no se cumplió con el acuerdo de creación del IMIP, en cuanto a presupuesto, así pues, una vez que se pudo completar la información, se solvento y quedo totalmente solventada.

Por lo que los argumentos vertidos mediante sus manifestaciones en la Audiencia de Ley no resultan suficientes para que esta autoridad determine la no responsabilidad administrativa, puesto que del análisis de las constancias que obran en los diversos expedientes, se puede determinar por parte de esta Autoridad, que la C.

, fue omisa en solventar las observaciones dentro del plazo establecido, siendo que la encausada se encontraba obligada a atender, en razón de lo desprendido en el expediente analizado, y en consecuencia, toda vez que la servidor público se encontraba fungiendo con la encomienda de solventar, como se demostró a través del mencionado oficio 150/2018 de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, oficio signado por la propia , en su carácter de Directora General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora, informando que personalmente ella sería el funcionario responsable de atender dicha auditoría, por lo que se evidencia que estaba fungiendo como enlace para solventar las observaciones señaladas, encontrándose que al incumplir con la encomienda que se designó a través del citado oficio, y por ello, al no quedar solventada la observación dentro del plazo establecido por parte de la encausada, trae como consecuencia el incumplimiento de sus obligaciones, por tanto, la encausada no cumplió cabalmente con su encomienda, ya que como servidor público debe acatar lo establecido en el artículo 7 fracción I y V de la Ley Estatal de Responsabilidades, mismo que establece:

Ley Estatal de Responsabilidades

Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

(...)

V.- Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;

Por lo anteriormente señalado, se puede inferir que dentro de las obligaciones como servidor público, lo es el actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, observando siempre el desempeño de su empleo, cargo o comisión, traducándose esto en que la encausada tenía la obligación de cumplir con la presentación de la documentación e información que solventara la observación, es decir, realizar las diligencias que fuesen necesarias con el fin de solventar totalmente, en un plazo de treinta días hábiles para la auditoría 2018AM0102010170, no obstante



la encausada no cumplió con tal encomienda, por ello, incurrió en la omisión de cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas mediante los multicitados oficios de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, resultando evidente la omisión de obligaciones por parte de la encausada, por consiguiente, es necesario acreditar el carácter de la C.

como servidor público de este H. Ayuntamiento, carácter que acreditó la Unidad Investigadora mediante copia certificada de nombramiento otorgado con fecha del once de abril de dos mil diecisiete, así como Acta de Reunión certificada donde se le otorga acuerdo de nombramiento, el cual en la página siete se informa que dicho interinato cubrirá de la fecha del mes de abril del año dos mil veinte al quince de septiembre del dos mil veintiuno, en el que se le designa como Directora General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora.

II.- En ese tenor se advierte en el actuar de la C.

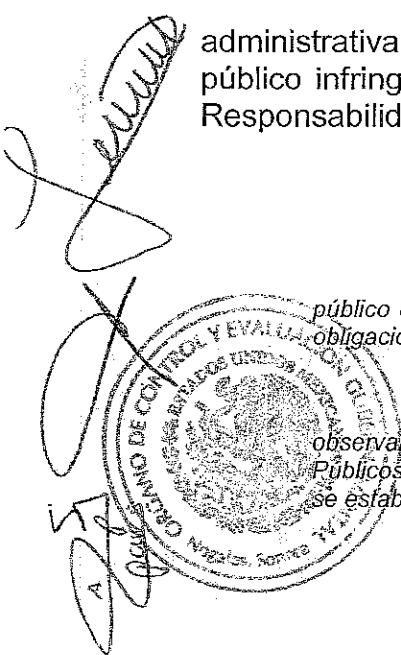
se violentaron disposiciones contempladas en la Ley Estatal de Responsabilidades, conductas que se pudieron prevenir, y por lo tanto al no cumplir con su obligaciones como servidor público, se evidenció la falta de responsabilidad del puesto conferido, debido a que queda plenamente acreditado que se encontraba fungiendo como servidor público de este H. Ayuntamiento Investigadora mediante copia certificada de nombramiento otorgado con fecha del once de abril de dos mil diecisiete, así como Acta de Reunión certificada donde se le otorga acuerdo de nombramiento, el cual en la página siete se informa que dicho interinato cubrirá de la fecha del mes de abril del año dos mil veinte al quince de septiembre del dos mil veintiuno, en el que se le designa como Directora General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora, por lo tanto, estaba obligada a cumplir con lo conferido en su encargo, cumpliendo con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, al igual que debió cumplir con la solventación en su totalidad de las observaciones dentro del plazo establecido.

De ahí que resulte la omisión en la que recayó la C.

misma omisión que originó el procedimiento de responsabilidad administrativa en tratamiento, por lo anterior, se acredita que el referido servidor público infringió lo establecido en la fracción I del artículo 88 de la Ley Estatal de Responsabilidades, el cual establece:

Artículo 88.- *Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:*

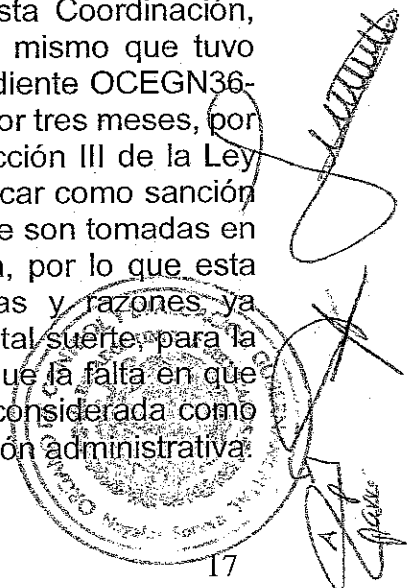
I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;



III.- Situación que resulta suficiente con lo hasta aquí analizado a efectos de fincar responsabilidad administrativa a la C.

, en virtud de que queda plenamente acreditado que durante el periodo que nos ocupa se encontraba ejerciendo funciones como servidor público en la Dirección General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora, por lo tanto, debe cumplir con lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades ya que se advierte que en el actuar de la encausada se detectaron omisiones descritas en el numeral II del presente capítulo, mismas conductas que pudieron haber sido prevenidas por la encausada, por lo cual no realizó las debidas gestiones necesarias para poder cumplir con lo solicitado en su función con máxima diligencia y esmero, ya que el ex servidor público en tratamiento fue omiso en cumplir con la presentación de la documentación e información que solventará las observaciones dentro del término otorgado para tales efectos, es por ello que esta autoridad resolutora determina fincar responsabilidad administrativa a la C.

motivo por el cual se procede a la **individualización de sanción**: con fundamento en el artículo 115 fracción IV, de la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, se le sanciona a la ex servidor público en mención con **INHABILITACIÓN TEMPORAL**, en virtud de que la naturaleza de la falta administrativa cometida no derivó en un menoscabo al erario público, no obstante, se infringió normatividad aplicable en cuanto a las responsabilidades que tiene como servidor, en virtud de lo anterior, se ha violentado **FLAGRANTEMENTE** las disposiciones legales que le obligaban como funcionario público, por lo que le era exigible la máxima diligencia en el servicio y cabalidad en tal omisión, es decir, cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, aunado a lo anterior y de conformidad al artículo 116 de la Ley Estatal de Responsabilidades en relación a la sanción administrativa impuesta, se tomó en cuenta que la servidor público responsable se desempeñaba como Directora General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora, es decir, funcionario de primer nivel dentro de la administración pública del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, quien en lo sucesivo es considerada una persona con educación, siendo esto que le concede un claro discernimiento entre lo que es correcto e incorrecto, lo que es conforme a derecho y contrario a derecho, que debe observar en todos sus actos, con conciencia del cometido, que así mismo se valora que la encausada cuenta con antecedentes administrativos dentro de esta Coordinación, toda vez que se desprende expediente OCEGN30-US-D08/2020, mismo que tuvo como sanción una amonestación privada, al igual que con el expediente OCEGN36-US-D82/2021, el cual tuvo como sanción la inhabilitación temporal por tres meses, por lo que se toma en consideración en términos del artículo 116, fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades, por lo que sirve de analogía para fincar como sanción la inhabilitación temporal en su sanción, así mismo, condiciones que son tomadas en cuenta para determinar la responsabilidad de la ahora encausada, por lo que esta autoridad considera como sanción idónea por las circunstancias y razones ya expuestas y para evitar las prácticas de esa misma naturaleza, de tal suerte, para la imposición de la sanción respectiva, habrá de tomarse en cuenta que la falta en que incurrió la C. , no está considerada como grave y no obtuvo beneficio o lucro alguno con motivo de tal infracción administrativa.



La aplicación de la sanción que establece la fracción IV, del artículo 115, de la Ley Estatal de Responsabilidades, siendo esta **INHABILITACIÓN** por un término de **CUATRO MESES**, para desempeñar empleo, cargo o comisión, en el servicio público, en los términos del último párrafo del artículo 115 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en consecuencia se ordena girar atento oficio una vez cause estado la presente resolución, a la Contraloría General del Estado de Sonora, a efectos de que quede registrada la inhabilitación con la cual se sanciona a la encausada.

SEXTO. PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

Por otro lado, y al advertirse que a la fecha, los particulares pueden presentar solicitudes de acceso a la información pública, en consecuencia y de conformidad con lo previsto en los preceptos 8 fracción III, 20 y 21, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, Artículo 23 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el diverso artículo 14 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, requiérase personalmente a las partes para que manifiesten su consentimiento o negativa respecto a que la presente sentencia, una vez ejecutoriada, se publique con sus datos personales, en el entendido de que dicha aceptación deberá ser expresa y por escrito o por un medio de autenticidad similar y que de no otorgar el consentimiento para que la publicación de las resoluciones o sentencias se realice con sus datos personales en los términos antes expuestos, o de no hacer manifestación alguna al respecto, entonces se deberán omitir o testar esos datos, es resolverse como al efecto se resuelve en definitiva bajo los siguientes puntos:-----

RESOLUTIVOS.

--- **PRIMERO.**- Esta Coordinación Sustanciadora y Resolutora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Nogales, Sonora, es y ha sido competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, por las razones y los fundamentos expresados con anterioridad.-----



--- **SEGUNDO.** - Se declara que de las constancias y comparecencias que obran en autos existe responsabilidad administrativa a cargo de la C.

por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 88 fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades, como ya se acreditó, imponiendo una sanción de **INHABILITACIÓN TEMPORAL** por un término de **CUATRO MESES**, con fundamento en el artículo 115 fracción IV, de la Ley anteriormente señalada, por los razonamientos ya expuestos dentro de la presente resolución.-----

--- **TERCERO.** - Notifíquese esta resolución a la encausada en el domicilio señalado en autos, comisionando para ello al notificador adscrito a este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, haciéndole saber que conforme a lo establecido por el artículo 250 de la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, cuenta con un término de quince días hábiles para interponer el recurso de revocación en caso de que así lo Considere.-----

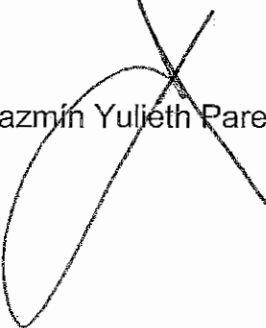
--- Así lo resolvió y firma la C. Licenciada **Gabriela Berenice Soto Gastelum**, Titular de la Coordinación Sustanciadora y Resolutora del Órgano de Control y Evaluación

Gubernamental del Municipio de Nogales, Sonora, ante los testigos de asistencia con quienes legalmente actúa. -----

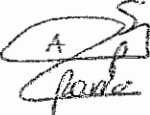


Lic. Gabriela Berenice Soto Gastelum.
Titular de la Coordinación Sustanciadora y Resolutora
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Testigos



Lic. Jazmín Yulieth Paredes Vázquez.



Lic. Samuel Parra Arámbula.

